



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**PRUEBAS SELECTIVAS, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA,
PARA INGRESO EN ESPECIALIDADES DEL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRADORES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007(BOJA DE 16 DE ENERO DE 2008)**

ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES GENERALES (A 1100)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- El presente ejercicio está compuesto de dos partes siendo ambas obligatorias y sumatorias.
- La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: $A-(E/5)$ (siendo A, el número de aciertos y E, el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 7,50 puntos.
- El ejercicio se valorará de 0 a 15 puntos. Para obtener la puntuación final, se sumarán las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las partes, siendo necesario para superar la fase de oposición, obtener al menos 7,50 puntos, una vez sumada la puntuación obtenida en ambas partes.
- El tiempo de realización de las dos partes de este ejercicio es de **180 minutos**.
- La primera parte consta de 100 preguntas, que deben ser contestadas en su «Hoja de Examen» entre los números 1 a 100, en la zona correspondiente a «1ª PARTE».
- La segunda parte consta de 20 preguntas, que deben ser contestadas en su «Hoja de Examen» entre los números 1 a 20 en la zona correspondiente a «2ª PARTE».
- Sólo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Examen».
- Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta, con tres respuestas alternativas, existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. El presente cuestionario se publicará en la web del empleado público

www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN SU «HOJA DE EXAMEN», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR CUANDO INDIQUE EL TRIBUNAL



PRIMERA PARTE

1. La delegación legislativa del Parlamento de Andalucía en el Consejo de Gobierno para la formación de textos articulados:

- a) Se otorgará mediante una ley ordinaria, que fijará el contenido de la delegación.
- b) Se otorgará mediante una ley de bases que fijará, al menos, su objeto y alcance, los principios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio y el plazo de ejercicio.
- c) No es posible delegar la potestad de dictar normas con rango de ley, pues es tan sólo el Parlamento quien puede dictarlas.

2. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, los Decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a la promulgación:

- a) No se publican.
- b) No son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

3. La existencia de un sistema de evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) Aparece recogida en la Ley del Gobierno de la Junta de Andalucía.
- b) No tiene plasmación jurídica en ninguna norma autonómica.
- c) Está prevista en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

4. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento:

- a) De forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
- b) De forma subsidiaria.
- c) En todo caso de forma individual.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, las competencias compartidas que asume esta comunidad autónoma comprenden:

- a) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución.
- b) La potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley.
- c) La función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley.

6. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en cuál de las siguientes materias, tiene competencias exclusivas la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) Contratos de las Administraciones Públicas.
- b) Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
- c) El conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del Flamenco.

7. ¿Qué tipo de competencias corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de expropiación forzosa?

- a) Exclusivas.
- b) Compartidas.
- c) Ejecutivas.

8. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la planificación, programación y gestión de viviendas y la participación en la planificación de la vivienda de protección oficial, son competencias propias:

- a) De los municipios.
- b) Del Estado y la Comunidad Autónoma.
- c) De la Comunidad Autónoma.

9. En el Parlamento de la Junta de Andalucía, las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de:

- a) Un miembro de la Cámara con la firma de otros diez.
- b) Diez miembros de la Cámara, con la firma de cada uno de ellos.
- c) Un Grupo parlamentario con la firma de sus miembros.

10. ¿Cómo se definen las cartas de servicios en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan aquéllas, el sistema de calidad y los premios a la calidad de los servicios públicos?

- a) Son documentos que tienen por objeto informar a la ciudadanía sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía y las condiciones en que se prestan.
- b) Son documentos en los que se informa a la ciudadanía sobre los derechos que les asisten en relación con los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía y sobre los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su prestación.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

11. Según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse:

- a) Mediante norma con rango de ley publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente.
- b) Mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente.
- c) Mediante Resolución de la persona titular del centro directivo competente por razón de la materia, sin que sea necesaria su publicación.

12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá consentimiento inequívoco del afectado, salvo:

- a) Que legal o reglamentariamente se determine otra cosa.
- b) Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas.
- c) Ninguna de las respuestas es correcta.

13. El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, se denomina:

- a) Principio de arbitrariedad.
- b) Desviación de poder.
- c) Principio de interdicción.

14. Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, se requerirá:

- a) Que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización en el momento de iniciación del procedimiento o en cualquier otra fase de tramitación del mismo.
- b) Las notificaciones administrativas no se pueden llevar a cabo por medios electrónicos.
- c) Que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización exclusivamente en el momento de iniciación del procedimiento.

15. Cuando existiendo constancia de la recepción por el interesado de una notificación telemática en la dirección electrónica señalada, transcurrieran diez días naturales sin que el sujeto destinatario acceda a su contenido:

- a) La notificación telemática se entenderá practicada a todos los efectos legales porque hay constancia de su recepción.
- b) Se entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancias del sujeto destinatario se compruebe la imposibilidad material o técnica del acceso.
- c) La notificación deberá volver a practicarse por correo ordinario en el domicilio del interesado y, si no fuere posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin.

16. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, los registros telemáticos dependientes de la misma permitirán:

- a) La entrada de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.
- b) La entrada de documentos durante los días y horas hábiles.
- c) La entrada de documentos durante los días y horas que se determinen reglamentariamente.

17. ¿Cuál de los siguientes principios está incluido en la enumeración contenida en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía?

- a) Eficacia.
- b) Buena fe.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

18. En el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general regulado en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no será necesario el trámite de audiencia a la ciudadanía:

- a) Cuando las organizaciones o asociaciones que la representen hayan participado por medio de consultas e informes en el procedimiento de elaboración de la disposición.
- b) Cuando no se trate de regular materias que afecten a los derechos susceptibles de amparo constitucional.
- c) Es un trámite necesario siempre, incluso cuando afecte a disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

19. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida a la Presidencia de la Junta de Andalucía, revestirán la forma de Decretos de la Presidencia.
- b) Cuando una Orden afecte a más de una Consejería, será firmada conjuntamente por las personas titulares de cada una de ellas.
- c) Las personas titulares de los centros directivos sólo tendrán potestad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas del mismo y sólo podrán dictar reglamentos cuando sean específicamente habilitadas para ello por una norma con rango de ley o por un reglamento del Consejo de Gobierno

20. Según lo dispuesto por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en las resoluciones administrativas de carácter sancionador:

- a) No cabrá la delegación de firma.
- b) No cabrá la delegación de competencias ni la delegación de firma.
- c) No cabrá la delegación de competencias pero sí la avocación de las mismas.

21. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá:

- a) Con carácter previo, declararlo lesivo para el interés público.
- b) Interponer el recurso en el plazo de tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
- c) Una Administración no puede demandar la anulación de sus propios actos.

22. La revocación de los actos de gravamen o desfavorables corresponderá:

- a) A las personas titulares de las Consejerías respecto de los actos dictados por órganos directivos de ellas dependientes.
- b) A las personas titulares de las Consejerías respectivas o al Consejo de Gobierno, según los casos.
- c) Al mismo órgano administrativo que dictó el acto.

23. La sustanciación de un procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial de la Administración podrá ser acordada por el órgano competente cuando iniciado el procedimiento general:

- a) Sea inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión.
- b) Sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
- c) La cuantía de la indemnización no supere los 3.000 euros.

24. Cual de los siguientes no puede considerarse un acto de instrucción del procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Las alegaciones de los interesados.
- b) El apremio sobre el patrimonio.
- c) La apertura de un periodo de prueba cuando no se tengan por ciertos los hechos alegados por los interesados.

25. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales atribuidas a la Administración:

- a) Deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
- b) No deben ser motivados, porque la disposición que atribuye la potestad discrecional contiene todas las condiciones necesarias para el ejercicio de esa potestad.
- c) Sólo serán motivados cuando se prevea expresamente por una norma con rango de Ley.

26. En el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley regulado por la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) La Consejería proponente elabora el proyecto y lo eleva al Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento de Andalucía, acompañándolo de los antecedentes necesarios.
- b) El anteproyecto de Ley es sometido dos veces al Consejo de Gobierno, la primera para que lo conozca y decida sobre ulteriores trámites y la segunda, para su aprobación como proyecto de ley.
- c) El anteproyecto es sometido dos veces al Consejo de Gobierno sólo en el caso de leyes que exigen para su aprobación una mayoría cualificada.

27. Los actos administrativos que ponen fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, deben motivarse:

- a) De acuerdo con lo que dispongan las normas que regulan sus convocatorias.
- b) Debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la Resolución que se adopte.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

28. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, son "Instrucciones":

- a) Las reglas de actuación específicas que se dirigen a un órgano jerárquico inferior.
- b) Las reglas de actuación específicas que se dirigen a otro órgano, con independencia de la relación jerárquica entre ambos.
- c) Son normas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por las que ha regirse las unidades dependientes del órgano que las dicta.

29. ¿Pueden publicarse las Instrucciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía?

- a) No.
- b) Sí.
- c) Cuando mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno se decida su publicación por estimarse conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el conjunto de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.

30. Señale la respuesta que completa correctamente la siguiente frase: De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la encomienda de gestión por parte de las Consejerías y sus agencias,

- a) No puede realizarse a favor de las sociedades mercantiles del sector público andaluz
- b) No esta prevista la encomienda de gestión a favor de las entidades instrumentales privadas.
- c) Puede realizarse a favor de sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.

31. ¿Es posible la encomienda de gestión de actividades y servicios que son competencia de otras Administraciones Públicas a favor de órganos o Agencias dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía?

- a) No.
- b) Sí, pero requiere la aceptación del Consejo de Gobierno y su formalización en Convenio que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- c) Sí, previa aceptación del encargo por la persona titular de la Consejería correspondiente.

32. La encomienda de gestión:

- a) Deberá publicarse en el Diario Oficial correspondiente para general conocimiento.
- b) Deberá publicarse en el Diario Oficial correspondiente para su eficacia.
- c) No se precisa publicación para su eficacia.

33. ¿Corresponde al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el asesoramiento jurídico de las sociedades mercantiles del sector público andaluz?

- a) Sí, cuando así se encomiende mediante Convenio con la Consejería competente en materia de Presidencia en el que se establezcan las condiciones de ejercicio de dichas funciones.
- b) El asesoramiento en Derecho sólo le corresponde respecto del Consejo de Gobierno, las Consejerías y las Agencias.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

34. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables,

- a) Previa declaración de lesividad en los términos del artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) En cualquier momento y circunstancia.
- c) En cualquier momento siempre que no se vulnere lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

35. Las Agencias de régimen especial, en el ámbito de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía:

- a) Son entidades públicas que se rigen por el derecho privado, salvo en determinadas cuestiones y aspectos previstos en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.
- b) Son entidades públicas que se rigen por el derecho público.
- c) Son entidades privadas que se rigen por el derecho público o privado de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos.

36. Para la ejecución forzosa de aquellos actos en que procediendo la compulsión sobre las personas, la Administración no lo estime conveniente:

- a) Podrá utilizarse la multa coercitiva, en todo caso.
- b) Podrá utilizarse la multa coercitiva si así está previsto legalmente.
- c) No podrá utilizarse la multa coercitiva en ningún caso.

37. La comparecencia de los ciudadanos en las oficinas públicas será obligatoria:

- a) Cuando así se determine por norma con rango de Ley.
- b) En ningún caso se puede obligar a un ciudadano a comparecer en una oficina pública.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

38. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades instrumentales se clasifican en:

- a) Agencias y entidades instrumentales privadas.
- b) Agencias, organismos autónomos y empresas públicas.
- c) Agencias, empresas públicas y fundaciones del sector público.

39. El Artículo 106 de la Constitución Española, en su tenor literal, reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos:

- a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
- c) La Constitución española no contempla este derecho.

40. De entre las siguientes, señale cuál es la afirmación correcta:

- a) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
- b) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
- c) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.

41. El acuerdo de avocación:

- a) No requiere motivación.
- b) Requiere motivación y notificación a los interesados en el procedimiento.
- c) No requiere motivación y no es susceptible de recurso.

42. Es competencia de la persona titular de la Secretaría de un órgano colegiado:

- a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la persona titular de la Presidencia del órgano.
- b) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
- c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

43. Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es motivo de abstención:

- a) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.
- b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados en el procedimiento de que se trate.
- c) El parentesco no es motivo de abstención si no va acompañado de interés directo en el asunto.

44. El principio del procedimiento administrativo según el cual se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, se denomina:

- a) Principio de acumulación.
- b) Principio de celeridad.
- c) Principio de actuación de oficio.

45. El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo:

- a) Debe notificarse al interesado a efectos de su posible impugnación.
- b) No será susceptible de recurso.
- c) Cabe su impugnación en la vía contenciosa.

46. El principio según el cual las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas, se denomina en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Principio de publicidad.
- b) Principio de jerarquía.
- c) Principio de inderogabilidad singular.

47. Son nulos de plenos derecho, los actos administrativos:

- a) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- b) Que incurran en desviación de poder.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

48. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie pudiera hacerse cargo de la misma, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, y:

- a) El intento se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes.
- b) El intento se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
- c) La notificación se tiene por practicada y se continúan las actuaciones sin más trámite.

49. A quien corresponde conocer en única instancia de los recursos contra las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales:

- a) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- b) Al Tribunal Supremo.
- c) A las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

50. La competencia para autorizar la enajenación de los bienes inmuebles corresponde si su valor no excede de seis millones de euros:

- a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- b) Al Parlamento, mediante Ley.
- c) Al Consejo de Gobierno.

51. Los arrendamientos de bienes inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía se acordarán:

- a) Por el titular del Departamento, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
- b) Por el titular del Departamento, previo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
- c) Por el titular del Departamento competente en materia de Patrimonio.

52. Son características comunes a los bienes de dominio público:

- a) Su inalienabilidad y prescriptibilidad.
- b) Pueden adquirirse por usucapión.
- c) Su inembargabilidad.

53. Las discrepancias que se produzcan entre dos o más Departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas:

- a) Por la persona titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio.
- b) Por el Consejo de Gobierno.
- c) Por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio.

54. Cuál de las siguientes entidades tiene personalidad jurídica pública y consideración de Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía:

- a) Sociedades mercantiles del sector público andaluz.
- b) Fundaciones del sector público andaluz.
- c) Agencias de régimen especial.

55. Son medios de ejecución forzosa de los actos administrativos:

- a) Apremio sobre el patrimonio.
- b) Ejecución subsidiaria.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

56. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía clasifica a los órganos colegiados, por su ámbito funcional, en:

- a) Órganos de participación administrativa o social.
- b) Órganos asesores, decisorios o de control.
- c) Órganos interdepartamentales o pertenecientes a una sola Consejería.

57. De acuerdo con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, por representación equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía se entiende aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en:

- a) Un cuarenta por ciento.
- b) Un cincuenta por ciento.
- c) Un sesenta por ciento.

58. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía ¿a quien corresponde la fiscalización externa del sector público andaluz?:

- a) Tribunal de Cuentas.
- b) Cámara de Cuentas.
- c) Intervención General.

59. ¿Cuál de los siguientes Fondos no contribuye a la financiación de los gastos de la Política Agrícola Común, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la Financiación de la Política Agraria Común?

- a) El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
- b) El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- c) El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

60. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 ¿qué son ayudas de *minimis*?

- a) Aquellas ayudas concedidas a empresas que no siendo superiores a 200.000 euros durante cualquier período de 3 ejercicios fiscales, están exentas de la obligación de notificar establecida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
- b) Aquellas ayudas concedidas a empresas que no siendo superiores a 155.000 euros durante cualquier período de 3 ejercicios fiscales, están exentas de la obligación de notificar establecida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
- c) Es una de las líneas de ayudas incluidas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, dirigida a facilitar la incorporación laboral de las personas que interrumpieron su trabajo para atender a hijos menores de 3 años.

61. Serán compatibles con el mercado común las ayudas otorgadas por los Estados miembros de la Unión Europea cuando se trate de:

- a) Ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales siempre que se otorguen sin discriminación basadas en el origen del producto.
- b) Ayudas destinadas a paliar daños por catástrofes naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

62. En el ámbito de la Política Regional Comunitaria, el principio de adicionalidad significa:

- a) La ayuda comunitaria se suma a la del país o región correspondiente, es un complemento.
- b) La ayuda comunitaria sustituye los gastos de los Estados miembros, de forma que estos pueden dedicar más recursos a otras políticas.
- c) La aportación que realiza el Estado miembro y la Unión Europea es la misma.

63. En qué Tratado se adoptó la decisión de introducir una moneda única europea:

- a) Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992.
- b) Tratado de Bruselas firmado en 1972.
- c) Acta Única Europea firmada en 1986.

64. De acuerdo con la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura, aquellas zonas que por su condición de área de reproducción, desove, cría y engorde de especies de interés pesquero, presenten condiciones diferenciadas para el desarrollo de los recursos pesqueros, podrán declararse:

- a) Zonas de repoblaciones marinas.
- b) Arrecifes artificiales.
- c) Reservas de pesca.

65. Según lo dispuesto por La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia creado por dicha norma:

- a) Responderá a una acción de la Administración General del Estado que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia.
- b) Responderá a una acción de las Comunidades Autónomas que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.
- c) Responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.

66. El derecho al uso privativo del dominio público hidráulico se adquiere:

- a) Por disposición legal o por concesión administrativa.
- b) El uso privativo del dominio público hidráulico está sujeto a autorización administrativa.
- c) El dominio público hidráulico es un bien común, por lo que no es posible su uso privativo.

67. Según la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, salvo en los supuestos en que por ésta u otra Ley se establezcan otros mínimos, las cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos:

- a) Por siete socios.
- b) Por tres socios.
- c) No hay un número mínimo de socios.

68. ¿Cuál de las siguientes prestaciones ha sido introducida como novedad por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social, para los supuestos de muerte y supervivencia?

- a) Auxilio por defunción.
- b) Prestación por orfandad.
- c) Prestación temporal de viudedad.

69. La Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) Es fruto de un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía que se materializó en la creación de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
- b) Es un Cuerpo policial propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- c) Es un Cuerpo especial dentro de la Policía Local que depende funcionalmente de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Política Interior.

70. A efectos de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, se entiende por consumidores y usuarios:

- a) Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales, bienes o servicios.
- b) Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales, bienes o servicios.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

71. Son puertos competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros:

- a) Los pesqueros, deportivos y de refugio.
- b) Todos aquellos que no ocupen el dominio público marítimo terrestre estatal.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

72. En los procedimientos de expropiación forzosa, se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal, entre otros supuestos:

- a) Cuando la propiedad fuere litigiosa.
- b) Cuando resultaren afectados menores de edad.
- c) Cuando comparezcan arrendatarios históricos de inmuebles rústicos.

73. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el órgano que conoce de los procedimientos de determinación del justiprecio de todas las expropiaciones cuando la Administración expropiante sea la Comunidad Autónoma:

- a) Jurado Provincial de Expropiación.
- b) Comisión Provincial de Valoración.
- c) Jurado Autonómico de Expropiación.

74. De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, no tienen la consideración de carreteras:

- a) Los caminos agrícolas y forestales.
- b) Los caminos de servicios.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

75. Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la elaboración del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, participarán las Comunidades Autónomas a través de:

- a) La Consejería de Medio Ambiente correspondiente.
- b) La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- c) La elaboración de un informe por el Consejo de Gobierno respectivo.

76. Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control, y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento, corresponderá:

- a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
- b) A los Ayuntamientos.
- c) Al Consejo de Gobierno.

77. De acuerdo con la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, en el Catálogo de Montes de Andalucía:

- a) Se incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de las Administraciones, Entidades Públicas.
- b) Se incluirán todos los montes pertenecientes cualquiera que sea su titular.
- c) Se incluirán todos los montes pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía.

78. Según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el sistema de actuación por el que los responsables de la ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la urbanización de sectores o, en su caso, unidades de ejecución, conforme a las determinaciones del instrumento aplicable, se denomina:

- a) Sistema de compensación.
- b) Sistema de cooperación.
- c) Sistema de expropiación.

79. Según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, no es una categoría de suelo urbanizable:

- a) Suelo urbanizable ordenado.
- b) Suelo urbanizable programado.
- c) Suelo urbanizable sectorizado.

80. El acto administrativo por el que se declara que la vivienda protegida, dentro de la promoción correspondiente, cumple los requisitos de superficie útil o construida establecidos para cada programa en los correspondientes Planes de Vivienda y demás requisitos urbanísticos y constructivos que resulten de aplicación, se denomina:

- a) Licencia de obras.
- b) Calificación provisional.
- c) Cédula de habitabilidad.

81. Según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones:

- a) Se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
- b) Se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva.
- c) Se tramitará por adjudicación directa.

82. La responsabilidad derivada de la comisión de infracciones en materia de subvenciones, se extingue:

- a) Por cumplimiento de la sanción, prescripción o fallecimiento.
- b) La responsabilidad no se extingue en tanto no se proceda al reintegro de las cantidades percibidas.
- c) A los cuatro años de la concesión de la subvención.

83. Corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía creada por Ley 23/2007, de 18 de diciembre:

- a) Realizar en régimen de autonomía de gestión, las actividades administrativas de aplicación de los tributos y las demás funciones y competencias referidas en la citada Ley.
- b) El impulso, coordinación y control de las actividades administrativas de aplicación de los tributos.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

84. ¿ Es posible la fiscalización previa por muestreo?

- a) Sí, pero sólo respecto a los gastos de personal.
- b) No es posible en los gastos sometidos a fiscalización previa.
- c) Sí es posible al estar prevista en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

85. ¿ Están exentos de fiscalización previa los expedientes de contratación tramitados por organismos sometidos a control financiero permanente?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Sí, excepto aquellos que constituyen la muestra seleccionada previamente por la Intervención General para su fiscalización previa.

86. El superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de todos sus entes instrumentales es:

- a) La Cámara de Cuentas de Andalucía.
- b) La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
- c) La Intervención General de la Junta de Andalucía.

87. Señale la respuesta que complete correctamente esta afirmación: Constituye la Tesorería de la Comunidad Autónoma todos los recursos financieros, tanto dinerarios, valores o créditos:

- a) Únicamente cuando correspondan a operaciones presupuestarias de sus organismos e instituciones.
- b) Tanto las operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias de sus organismos e instituciones.
- c) Que aparezcan en sus conceptos y cuantías, como tales, en la Ley Anual de Presupuestos.

88. Con carácter general los derechos a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía prescribirán:

- a) A los cinco años desde su notificación o vencimiento.
- b) A los cuatro años desde su notificación o vencimiento.
- c) No prescriben nunca.

89. Según el artículo 42 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las modificaciones presupuestarias que requieren ser aprobadas por Ley específica del Parlamento de Andalucía son:

- a) Sólo los créditos extraordinarios.
- b) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito.
- c) Las ampliaciones de créditos.

90. El control sobre la actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía puede ser:

- a) Sobre los ingresos y sobre los gastos.
- b) Interno y externo.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

91. Está sometido al Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía el personal laboral que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Sólo respecto de aquellas normas que resultan aplicables en virtud del principio de condición más beneficiosa.

92. En el ámbito laboral, son nulos los pactos que establezcan un período de prueba cuando:

- a) El empleador se trate de una Administración Pública.
- b) No se determine concretamente el contenido propio del período de prueba.
- c) El trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

93. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores se entiende que se incurre en cesión ilegal de mano de obra:

- a) Cuando la cesión no se lleve a cabo por una empresa de trabajo temporal.
- b) Cuando el objeto de los contratos de servicios entre empresas se limite a una mera puesta a disposición de la empresa cedente a la cesionaria.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

94. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo:

- a) Facultarán en todo caso al trabajador para solicitar la extinción del contrato de trabajo.
- b) Facultarán la extinción a iniciativa del trabajador si redundan en perjuicio de su formación profesional o menoscaban su dignidad.
- c) Facultarán al trabajador cuando sean reiteradas por parte del empleador.

95. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que celebra la Junta de Andalucía, ¿qué carácter tienen?:

- a) Contratos privados.
- b) Contratos administrativos.
- c) Contratos administrativos especiales.

96. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando el contrato:

- a) Se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación.
- b) Se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hayan transcurrido tres años desde su adjudicación.
- c) Se hubiese ejecutado en el 30 % de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

97. Cómo se definen los contratos de servicios en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

- a) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.
- b) Aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado por un período determinado en función de la duración de las formulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global de interés general.
- c) Aquellos en los que la realización de su objeto sea de carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de obras o suministros.

98. ¿Qué previsión contiene la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público respecto a la exigencia de clasificación para las Universidades Públicas?:

- a) Las Universidades Públicas están sometidas al mismo régimen de exigencia de clasificación que las empresas.
- b) No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos que tengan por objeto la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.
- c) Las Universidades Públicas están exentas de acreditar su clasificación y no tienen que exigir clasificación en los contratos que adjudiquen.

99. Conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes muebles que celebran las Administraciones Públicas, son:

- a) Contratos privados.
- b) Contratos de suministro.
- c) Contratos mixtos.

100. La renuncia por la Administración a la celebración de un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria está prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

- a) Cuando esté fundada en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
- b) Cuando concurren razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.
- c) Cuando ninguna oferta se haya presentado a la licitación.

SEGUNDA PARTE

Tras la tramitación del correspondiente procedimiento de concurrencia competitiva y a propuesta del ORGANISMO DIRECTIVO X, la persona titular de la CONSEJERÍA XX resolvió adjudicar a la ENTIDAD XXX, Soc. Coop. And. una subvención por importe de 12.000 euros para el diseño y puesta en funcionamiento de un portal web.

La resolución de adjudicación dictada el 1 de febrero de 2006 fue publicada en el BOJA de 13 de febrero de 2006 y en la misma se establecía un plazo de dos meses a partir de la adjudicación, para su justificación.

La normativa reguladora de la subvención permitía el pago anticipado con justificación diferida de hasta el 75% del importe de la subvención, de forma que con fecha 15 de marzo de 2006 la Intervención Delegada en la Consejería XX fiscalizó favorablemente un documento contable OP por importe de 9.000 euros cuyo pago se materializó el 14 de abril de 2006.

Con fecha 15 de septiembre de 2006 la Intervención Delegada en la Consejería XX dirige oficio al ORGANISMO DIRECTIVO X, responsable del programa presupuestario al que se imputó el gasto de la subvención, adjuntando un listado de documentos contables pendientes de justificar.

A la vista del requerimiento de la Intervención, el ORGANISMO DIRECTIVO X, tras comprobar que la ENTIDAD XXX, Soc. Coop. And. no ha aportado la documentación justificativa exigida en la normativa reguladora y en la resolución de concesión de la subvención, dicta Resolución de inicio de procedimiento de reintegro que es notificada a la entidad beneficiaria el 5 de octubre de 2006, concediéndosele trámite de audiencia.

En el trámite de audiencia concedido, la ENTIDAD XXX, Soc. Coop. And. alega que las lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas acaecidas en la localidad en la que tiene su sede social han impedido el ejercicio de cualquier actividad, por lo que solicita se conceda una prórroga del plazo de justificación en atención a la causa de fuerza mayor concurrente.

1. En el presente supuesto, cual sería el órgano competente para acordar el reintegro:

- a) Organismo directivo X
- b) Intervención Delegada en la Consejería XX
- c) Persona titular de la Consejería XX

2. ¿En qué sentido deberá pronunciarse la Resolución de reintegro?:

- a) Declarará la procedencia del reintegro de la cantidad de 12.000 euros
- b) Declarará la procedencia del reintegro de la cantidad de 9.000 euros
- c) Declarará la improcedencia del reintegro por concurrir causa de fuerza mayor y concederá la prórroga solicitada.

3. En el caso de que se acordase la procedencia del reintegro, deberá la Resolución pronunciarse sobre los intereses?

- a) No, los intereses solo son exigibles en la vía de apremio.
- b) Sí, procede exigir el interés de demora correspondiente que será el interés legal del dinero incrementado en un 25%.
- c) Sí, procede exigir el interés de demora correspondiente que será el interés legal del dinero sin el incremento del 25% por tratarse de una sociedad cooperativa.

4. En el caso de que se acordase la procedencia del reintegro y se exigiese el interes de demora ¿cómo se calcularía éste?:

- a) Desde el 14 de abril de 2006 hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
- b) Desde el 13 de febrero de 2006 hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
- c) Desde el 5 de octubre de 2006 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro.

5. Si con fecha 7 de octubre de 2007 no hubiese recaído resolución expresa en el procedimiento de reintegro, como informaría Vd. la situación planteada:

- a) Se ha producido la caducidad del procedimiento pero no ha prescrito la acción para exigir el reintegro.
- b) Ha prescrito la acción para exigir el reintegro por caducidad del procedimiento.
- c) No se aprecia caducidad ni prescripción.

—o0o—

La mercantil XXX, S.L. fue sancionada con una multa de 82.800 euros por el Consejo de Ministros, órgano competente en la materia, como consecuencia de una infracción sobre normativa agraria, concretamente relativa a la producción del vino con denominación de origen. La infracción lo fue a lo dispuesto en una Orden Ministerial, aprobatoria del reglamento de denominación de origen; sin embargo la tipificación de la sanción según el Tribunal Supremo, era doble: la Orden Ministerial y un Decreto de 1970 que aprobó el Estatuto del Vino.

Posteriormente y como culminación al proceso de impugnación el referido Tribunal dictó sentencia donde declaraba la nulidad de la referida Orden Ministerial, concretamente por carecer en su elaboración del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Una vez dictada dicha sentencia y transcurridos siete meses desde ese momento y más de tres años después de la imposición de la sanción, firme ésta y una vez abonada la multa, la mercantil XXX, S.L. presentó escrito ante el Departamento competente donde solicitaba se declarara la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse impuesto una sanción con base en una disposición de carácter general posteriormente declarada nula.

Se desea que sobre los datos contenidos en el supuesto responda a las siguientes cuestiones:

6. La nulidad de las disposiciones generales, como la del supuesto, debe entenderse que:

- a) Es siempre nulidad radical, absoluta o de pleno derecho.
- b) No es siempre nulidad absoluta, radical o de pleno derecho cuando el motivo de anulación obedece a defectos de procedimiento, siendo en ese caso anulable.
- c) Los tribunales pueden optar entre la declaración de nulidad radical o la anulabilidad, dependiendo de los efectos que pretendan otorgarse a la resolución judicial.

7. Si tuviera usted que informar en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la mercantil XXX, S.L. lo haría en el sentido de concluir que:

- a) Se cumplen todos y cada uno de los requisitos legales para considerar la existencia de responsabilidad patrimonial.
- b) No se cumple el requisito consistente en que el daño sea efectivo.
- c) No se cumple el requisito consistente en la antijuricidad de la conducta de quien produce el daño.

8. En el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el caso que nos ocupa, el plazo para reclamar sería de:

- a) Seis meses desde que se notificó la sentencia
- b) Un año desde que se dictó la sentencia
- c) Un año desde que se produjo la lesión.

9. A su juicio y en el caso que nos ocupa:

- a) Las sentencias que anulen preceptos de una disposición general no afectan por sí mismas a los actos administrativos que la hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.
- b) La respuesta anterior es correcta pero debe añadirse, como excepción a la regla general, que se trate de sanciones que puedan verse excluidas o reducidas.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores puede considerarse correcta.

10. En el caso que nos ocupa, si no se hubiese producido una resolución administrativa expresa:

- a) Deberá entenderse estimada la reclamación.
- b) Deberá entenderse desestimada la reclamación.
- c) Ninguna de las dos respuestas es correcta.

—————oOo—————

Tras la aprobación del Decreto del Presidente, de reestructuración de Consejerías, resulta necesaria la ubicación de una nueva Consejería en el centro de Sevilla, junto al Palacio de San Telmo, para lo cual la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda recibe el encargo de contratar un arrendamiento de un inmueble que sirva a estos fines.

Se desea que sobre los datos contenidos en el supuesto responda a las siguientes cuestiones:

11. ¿ Se puede buscar un edificio para su arrendamiento, dada la concreta ubicación que se requiere, sin necesidad de convocatoria pública?:

- a) No, es obligatorio que el arrendamiento se realice mediante concurso público.
- b) Sí, siempre que publique un anuncio en prensa o interese tres ofertas a posibles arrendadores.
- c) Sí, siempre que el arrendamiento se contrate por una duración inferior a un año.

12. Dado que el organismo usuario del inmueble no va a ser la Dirección General de Patrimonio sino la Consejería de nueva creación, ¿quién ha de adjudicar el contrato de arrendamiento?

- a) En cualquier caso, ha de ser la Dirección General de Patrimonio, aunque no ocupe el inmueble.
- b) La competencia corresponde a la persona titular de la Consejería de nueva creación.
- c) El acuerdo de inicio corresponde a la Consejería usuaria y la adjudicación a la Dirección General de Patrimonio.

13. En el supuesto anterior, ¿la Dirección General de Patrimonio interviene de algún modo en el procedimiento?

- a) Sí, es la adjudicadora del contrato.
- b) No, el procedimiento se tramita íntegramente por la Consejería usuaria.
- c) Sí, emite un informe vinculante.

14. Si el inmueble objeto de arrendamiento, fuese a ser ocupado por más de una Consejería, el procedimiento sería tramitado por:

- a) Las Consejerías futuras usuarias, de común acuerdo.
- b) La Consejería de Economía y Hacienda.
- c) La Consejería que haya de ocupar más espacio en el inmueble.

15. De entre los supuestos que regula la legislación de patrimonio, la causa de la adjudicación directa del arrendamiento correspondería a:

- a) Emergencia.
- b) Limitación de mercado.
- c) Discrecionalidad documentada.

—o0o—

Mediante Orden de la Consejería competente en materia de pesca se regulan la condiciones para la captura comercial de determinadas especies pesqueras. De acuerdo con esta Orden, las personas interesadas en dedicarse a esa actividad extractiva, necesitan obtener una licencia por parte de la Administración, la cual puede solicitar a la Delegación Provincial correspondiente, si bien la competencia para otorgarla corresponde a la persona titular de la Consejería.

El Sr. JPM, interesado en obtener la referida licencia, presenta una solicitud en la Delegación Provincial de la Consejería en Granada.

La persona titular de la Delegación Provincial, al constatar que el Sr. JMP no cumple con la mayoría de las condiciones establecidas en la Orden, deniega su solicitud mediante Resolución que es comunicada por correo electrónico a la dirección que aparecía en un membrete en la solicitud.

Se nos plantean las siguientes cuestiones:

16. ¿Es correcta la práctica de la notificación de la Resolución realizada al correo electrónico del Sr. JMP?

- a) Sí, porque tanto la Ley 30/1992, como la Ley 9/2007, prevén expresamente la posibilidad de realizar la notificación mediante medios telemáticos.
- b) No es correcta, y sería preciso realizar una nueva notificación en la dirección postal que indica el interesado.
- c) Será correcta, siempre que indique el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

17. En el caso de que el Sr. JMP hubiese comunicado su dirección de correo electrónico como medio preferente de notificación ¿ésta podría tramitarse de forma electrónica?

- a) Sí, si la normativa reguladora del procedimiento lo prevé expresamente.
- b) En cualquier caso, en base al derecho reconocido por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- c) No, porque la notificación electrónica solo es posible en los procedimientos íntegramente automatizados.

18. La Resolución de la Delegación Provincial de Granada, puede considerarse que es ejecutiva ?

- a) Sí, es ejecutiva y produce efectos desde el momento en que se dictó, con independencia de que luego se pudiera declarar su invalidez.
- b) No es ejecutiva, porque ha sido dictada por órgano manifiestamente incompetente.
- c) Sí, es ejecutiva y produce efectos desde que se notificó al interesado, con independencia de que luego se pudiera declarar su invalidez.

19. En su opinión, ¿la Resolución de la Delegación Provincial sufre algún vicio de legalidad?

- a) Sí, se trata de un acto nulo de pleno derecho, al haber sido dictado por órgano incompetente, pero se podría convalidar por el órgano que tuviera otorgada la competencia para dictar ese acto.
- b) Se trata de un acto anulable, pero se podría convalidar por el órgano que tuviera otorgada la competencia para dictar el acto.
- c) Tiene un vicio de legalidad, pero se trata de una irregularidad no invalidante..

20. En el supuesto de que el Sr. JMP sí reuniera todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Orden para la obtención de la licencia de la actividad extractiva y la Resolución de la Delegación Provincial hubiera concedido la oportuna licencia, ¿Sería posible la convalidación? ¿Qué efectos tendría?

- a) Si sería posible la convalidación, y en dicha hipótesis sería posible dar al acto administrativo efecto retroactivo.
- b) Si sería posible la convalidación, y el acto de convalidación produciría sus efectos desde su fecha en todo caso.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

